

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO MANIZALES

A.I. 1253

Asunto:	Resuelve recurso de reposición
Medio de Control:	Reparación directa
Radicado:	17-001-33-33-003-2014-00228-00
Demandante:	Lina Johana Candamil Zuluaga y otros
Demandadas:	Instituto Nacional de Vías y otros
Llamadas en garantías	Confianza S.A. y otros

Manizales, quince (15) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Procede el Despacho a decidir sobre los **recursos de reposición** formulados oportunamente por **Seguros del Estado S.A.** y el **Consorcio Vías del Centro** integrado por Procopal S.A. e Ingeniería de Vías S.A. en contra del Auto del 31 de mayo de 2024, mediante el cual se concedió un amparo de pobreza para practicar dos pruebas periciales.

Consideraciones:

Procedencia de los recursos reposición:

La procedencia del recurso de reposición fue contemplada por el artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma que en cuanto a la oportunidad y trámite del mismo remite a lo dispuesto en el actual Código General del Proceso.

Fundamento de los recursos:

Seguros del Estado S.A. argumenta que para sustentar la carencia de recursos económicos la parte actora allega 10 recibos de pago de servicios públicos, de los cuales sólo dos corresponden al estrato 2.

De esta manera, sostiene que la solicitud de amparo de pobreza no reúne los requisitos normativos y jurisprudenciales en tanto no solo no sustenta

razonadamente la situación económica de cada uno de los demandantes, sino que, además, las pruebas allegadas no coinciden con lo manifestado en las solicitudes.

Por su parte, el **Consortio Vías del Centro** integrado por Procopal e Ingeniería de Vías S.A., sostiene que de acuerdo con el artículo 157 del C.G.P. los honorarios solo serán pagados por la parte contraria si fuese condenada en costas; el mismo estatuto procesal no le confiere la facultad al juez para distribuir las cargas de los costos de la práctica de la prueba pericial.

Refiere que las citas jurisprudenciales del Auto recurrido no son aplicables a este caso porque no autorizan al juez para trasladar la carga a la parte contraria; por esta razón considera que el Juzgado excedió las facultades en relación con la figura del amparo de pobreza otorgando una consecuencia no prevista en el ordenamiento jurídico.

Caso concreto.

Frente a los argumentos expuestos por los recurrentes el Juzgado observa que la figura del amparo de pobreza no se limita a la designación del profesional del derecho que requiera un ciudadano para ejercer su representación judicial, ni tampoco se exige que deba ser formulada desde el inicio o antes del proceso judicial. El objetivo de la misma es evitar que una persona en una situación económicamente difícil sea exonerada de la carga procesal de asumir ciertos costos que se generan en el trámite de un proceso; estas circunstancias pueden presentarse en el transcurso del trámite judicial.

De esta manera, aunque los accionantes cuentan con apoderado de confianza refieren que su situación económica actual les impide asumir los costos del dictamen pericial en razón a la escasez de sus recursos. Verificadas las facturas de servicios públicos, se evidencia que el grupo familiar encabezado por la señora **Lina Johana Candamil Zuluaga** reside en estrato socioeconómico bajo; entre tanto el grupo del señor **Efraín Antonio González** reside en una vivienda clasificada como estrato 3 en calidad de arrendatarios en el barrio Colon de Manizales que pertenece a la Comuna San José; este sector cuenta en general con población de ingresos económicos limitados.

En supuestos como el que hoy se decide, el amparo de pobreza es una medida:

“(…) que buscar corregir y equilibrar las desigualdades que se pueden presentar en el trámite de un proceso judicial para garantizar la igualdad, ya que se trata de un beneficio que se concede a la parte de un proceso que lo necesita, y dentro del

marco de la Constitución y la ley”¹.

De esta manera, la medida adoptada por este despacho garantiza el acceso a la administración de justicia de los accionantes desde una perspectiva material porque le confiere la posibilidad de que se practique la prueba teniendo en cuenta sus condiciones económicas particulares; estas además fueron verificadas por el juzgado, tal y como obra en el expediente.

Ahora bien, no le asiste razón a los integrantes del Consorcio Vías del Centro cuando señala que la actuación del Juzgado desborda las facultades legales. Al respecto en sentencia de tutela del 14 de marzo de 2022, emitida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se confirma en segunda instancia fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el cual se amparan los derechos fundamentales de la accionante y ordena que en caso de ser necesario los gastos del dictamen debían ser asumidos por las demandadas².

En el mismo sentido y también en sede de acción de tutela, el Consejo de Estado en sentencia del 27 de mayo de 2019, dispone que los gastos de la prueba pericial debían ser asumido por las demandadas en virtud del amparo de pobreza³.

De esta manera, se tiene que la decisión adoptada por este Juzgado representa una garantía efectiva del derecho de acceso a la administración de justicia de la parte que se encuentra en situación económica mas desfavorable y es una postura que se fundamenta en los principios constitucionales adoptados en nuestra Carta Política.

Sin embargo, se advierte que la prueba decretada para establecer las secuelas psicológicas a cargo del Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses representa unos costos elevados, teniendo en cuenta que su valor asciende a un millón ciento doce mil pesos ochocientos treinta y uno (\$1.112.831) por persona y que la prueba fue decretada para los 13 demandantes.

Esta orden judicial implica una carga desproporcionada para la parte pasiva y por esta razón el amparo de pobreza se limitará a cubrir los gastos de las víctimas directas Martín Emilio Medina Peña y Lina Johana Candamil Zuluaga; en este sentido se modificará parcialmente para la decisión del 31 de mayo de 2024.

Otras decisiones.

Revisado el expediente se observa que otras codemandadas y llamadas en garantía solicitan información sobre la cancelación de los gastos de las pruebas periciales.

¹ Consejo de Estado Sección Segunda, providencia del 04 de febrero de 2016; exp 2201-11

² Sección Tercera, C.P Freddy Ibarra Martínez, Exp 05001-23-33-000-2022-00043-01

³ Sección Tercera C.P. Ramiro Pazos Guerrero Exp 05001-23-33-000-2019-00420-01

La **Compañía Mundial de Seguros S.A.** requiere se establezcan los honorarios que corresponden al Instituto de Medicina Legal y el **Invías** solicita se establezcan las sumas exactas que deben cancelarse y la ampliación para realizar los respectivos trámites internos.

El dictamen a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses asciende a un millón ciento doce mil pesos ochocientos treinta y uno (\$1.112.831) por persona. Tal y como acaba de definirse el amparo de pobreza sólo tendrá cobertura para las víctimas directas Martín Emilio Medina Peña y Lina Johana Candamil Zuluaga; por tanto los gastos con respecto a esta prueba que deberá cancelar cada una de las accionadas y llamadas en garantía (**Invías, el Consorcio Vías del Centro (Ingeniería de Vías S.A. y Procopal S.A.), Omar Bernal Orozco, Seguros del Estado S.A., Compañía Mundial de Seguros S.A. y Confianza S.A.**) corresponden a ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos setenta y dos pesos (\$185.472).

Frente a la prueba que deber ser practicada por la Universidad CES de Medellín, se debe informar que la misma tiene un valor de quince (15) salarios mínimos (incluyendo la sustentación del dictamen) equivalentes a diecinueve millones quinientos mil pesos (\$19.500.000); por tanto, cada uno de los demandados y llamados en garantía deberán cancelar la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos (3.250.000).

Dado que las accionadas deben realizar sus trámites internos para obtener las erogaciones respectivas, se les concede el término de dos meses a partir de la notificación de la presente providencia para que demuestren el pago de los honorarios de las pruebas periciales de acuerdo con lo indicado anteriormente. En consecuencia, se **cancela** la audiencia programada para el próximo 24 de julio de 2024 y se fijará nueva fecha y hora una vez se cuenten con los respectivos informes.

Por lo expuesto, el **Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Manizales,**

RESUELVE:

Primero: Reponer parcialmente el Auto del 31 de mayo de 2024, en el sentido de limitar el amparo de pobreza referido a la valoración psicológica a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses solamente para las víctimas directas, esto es para Martín Emilio Medina Peña y Lina Johana Candamil Zuluaga.

En lo demás se confirma la providencia recurrida-

Segundo: En firme esta providencia, se requiere a las accionadas para que en el

término de **dos (02) meses** acrediten el pago de los honorarios a favor de la Universidad Ces de Medellín y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Tercera: Cancelar la audiencia programada para el próximo 24 de julio de 2024.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JACKELINE GARCÍA GÓMEZ
JUEZA

Plcr/ P.U

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
MANIZALES – CALDAS
NOTIFICACIÓN POR ESTADO

La providencia anterior se notifica en el Estado del dieciséis de julio de 2024

CRISTIAN CAMILO MUÑOZ PATIÑO
Secretario

Firmado Por:
Jackeline Garcia Gomez
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
007
Manizales - Caldas

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a299cfd8e9ab75f80358640d843b0ae3e1cf0c8bc2cf3418ad267fac37f9bbb1**

Documento generado en 15/07/2024 04:22:38 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>